

(Viene de página 7)

La falta de debate interno y de conducción de los bloques legislativos hace que el peronismo navegue sin rumbo, aunque, aun así, las condiciones objetivas pueden terminar favoreciéndolo.

LA DISCUSIÓN POR LOS CARGOS EN LA CORTE SUPREMA

Este medio lo asegura desde 2021, cuando se fue por la puerta de atrás la ministra Highton. Una jueza que llegó precedida de prestigio por su desempeño en las cámaras civiles, pero terminó de la peor forma. La Corte Suprema recién se completará al comenzar el período ordinario de 2025, no antes. Alberto, que no logró que su candidato a procurador general -Daniel Rafecas- siquiera pasara a la consideración de la Comisión de Acuerdos, prefirió no proponer a nadie en su reemplazo, consciente de que juntar 48 votos no era fácil, aunque no menos fácil era que Cristina lo habilitara para lograr dictamen.

Hace unas semanas, cuando Javier Milei anunció el nombre de Ariel Lijo y García Mansilla, incluso cuando muchos descontaban la posibilidad de cerrar los números, este medio insistió en que habría que esperar a 2025. A partir de diciembre de 2024, la Corte, con la salida de Juan Carlos Maqueda funcionará con tres jueces hasta que se complete. Aunque, en caso de ser necesario, se convocaría como subrogantes a dos presidentes de cá-

maras federales para completar el Tribunal.

Recién para el segundo trimestre del año venidero y conforme a la realidad política que entonces muestre el Senado, será posible avanzar con los acuerdos que no sólo incluirá a las dos vacantes de jueces, sino también, al no menos importante cargo del procurador general. Quizás hasta el defensor del pueblo, vacante desde hace varios años que requiere, también, de los dos tercios.

Será el tiempo de la política con operadores que conozcan el paño para un lugar tan expectante como es la determinación de quiénes se sentarán en la mesa decagonal del cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Todo lo que se hable por estos meses serán «fuegos de artificios», hasta que el Poder Ejecutivo termine por retirar los pliegos enviados. Crónica de un final anunciado por este medio que difícilmente se equivoque. La Corte tiene sus códigos, sus tiempos y sus formas. Está claro que es un terreno que Milei desconoce bastante; más complejo, por cierto, que el del Congreso de la Nación y donde no hay espacio para «largar la boca».

CAMINO HACIA «LA DOCTA»

Todo parece indicar que, luego de los primeros escarceos, donde los gobernadores creyeron ser dueños de una fuerza que no tenían, el Poder Ejecutivo comenzó a hacer efectivo lo que había anticipado. O sea, a hacer uso de los resortes del poder con una batería de medidas que hicieron que los man-

«EL CORRENTINO NO SE AMANSA A GUACHAZOS». Una de cal y otra de arena. A pocos días de una encendida defensa de las líneas directrices de la gestión libertaria, Gustavo Valdés salió a marcar la cancha, abriendo el paraguas. Lo hizo con un mensaje a sus comprovincianos, entendiéndose que las elecciones se ganan o se pierden en Corrientes y sin importarle que había expresado que con Milei le fueron suficientes dos minutos para entenderse. Es que, pese a que el Gobierno negó haberle recortado

fondos a trece provincias a las que debía enviarle partidas por una deuda de Anses con las cajas previsionales provinciales, el «rum-rum» no se aplaca y pone con la guardia alta a los mandatarios provinciales que no ganan sino para sustos con las idas y vueltas del Presidente. A la salida de un acto en homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas en Goya, Valdés recordó que Nación no les envió ni un peso por los fondos que le debe a la Provincia por el Instituto de Previsión Social de Corrientes. «No nos mandaron nada desde principio de año. Tenemos una demanda metida hace varios meses. Son 25 mil millones que le deben a la Provincia, más otro tanto de regalías, más otro tanto de un acuerdo fiscal no pagado y calculamos que son unos 100 mil millones», remarcó. «Este año el Gobierno mandó cero pesos para compensar a la caja. Hemos hecho la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que paguen a los jubilados correntinos que ahora hacemos frente con nuestros recursos y eso es lo que nos deben. Así como nos quieren cobrar tienen que pagarnos porque es ley, y el que la incumple comete un delito», aseguró en tono de advertencia. Después de esa afirmación remarcó: «Tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien. No nos van a apretar. El correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas y no pudieron. Que no intenten el mismo camino», expresó el gobernador con un discurso hacia los correntinos entre los que su alta imagen, que es un dato de la realidad, le hace pensar que está en condiciones de proponer al sucesor de su espacio. «Simplemente reclamamos lo que es nuestro. Al correntino nunca le regalan nada y no queremos que nos regalen, pero tampoco queremos que nos saquen injustamente», concluyó Valdés, quien dejó un espacio para que su mensaje llegara al radicalismo nacional. Está claro que no está dispuesto a resignar el terreno ganado en la disputa por la sucesión partidaria, en la que el actual titular quedó con el ala rota. Pero también tiene en cuenta que, para ello, debe asegurar seguir con el control del territorio.



EL GOBIERNO ABRE OTRO FRENTE EN LA PELEA CON LOS GOBERNADORES.

En medio de la negociación que el Gobierno lleva a cabo con los mandatarios provinciales, se sumó en estos días un nuevo frente de tormenta, luego de que Cammesa, la empresa mayorista de energía, comenzara a enviar cartas a las gobernaciones y a las cooperativas provinciales reclamando el pago de importes adeudados, pero también facturas de servicios de febrero que reportan aumentos de hasta 150%.



Nada fue de lo que corresponde, por cierto, más allá de que por año venía con un relajamiento en la relación Nación-provincias que terminaba por pagar la gente por mayor inflación como consecuencia de la emisión descontrolada o el endeudamiento para cubrir el recurrente déficit que año a año mostraban las cuentas públicas. La decisión de pasar al déficit cero, eliminar la emisión y cortar el endeudamiento deviene en la necesidad de sincerar la economía desde la eliminación de millonarios subsidios como a muchas otras decisiones que forman parte del ajuste que se hace por esos meses. En el interior, el malestar crece aún más cuando trasciende que las distribuidoras que operan en el Amba mantienen deudas superiores. Edenor le adeuda a la mayorista \$127 mil millones, mientras que el pasivo de Edesur asciende a \$72.500 millones. Cuando Sergio Massa estuvo como ministro de Economía quiso incluir en el proyecto de Presupuesto 2023 un artículo que obligaba a las provincias a regularizar las deudas con Cammesa bajo la amenaza de descontar de otras partidas los importes adeudados. La iniciativa no prosperó porque los diputados, en ese momento, entendieron que las gobernaciones no podían hacerse cargo de los desmanejos de las cooperativas y la discusión se diluyó en la política. Este nuevo conflicto se suma a otros abiertos con las gobernaciones por fondos millonarios, como la eliminación de los fideicomisos, que eran cajas de la política por varios miles de millones de dólares, los que aportaba Nación para los salarios docentes, los vinculados al transporte y la plata que la Casa Rosada enviaba a las cajas jubilatorias de trece provincias que, en este caso, tendrían cobertura legal, pero que suponen la necesidad de acuerdos políticos en un momento en que el poder central hace valer el control de la botonera del poder. La simple amenaza de algunos gobernadores de recurrir a la Corte Suprema no le tinga a un Milei que sabe que los tiempos de la Justicia no son los de las necesidades de las provincias. Sabe también que tarde o temprano deberán ir al pie, con el «caballo cansado». Un recurso a la Corte lleva años de tramitación y, de haber sentencia favorable, la posibilidad de su cumplimiento pasa a ser motivo de otra negociación. Lo más probable es que para entonces ni Milei, ni los gobernadores reclamantes sigan en funciones. Las necesidades son de hoy y no esperan. Un punto a favor del Presidente que, desde el principio, cuando le negaron la «ley ómnibus» y el DNU, dejó en claro que ello obligaría a redoblar la política de ajuste que incluyó la baja de las transferencias discrecionales a las provincias.

datarios provinciales comenzaran a entender que el Presidente es «un hueso duro de roer», no dispuesto a hacer concesiones que impliquen poner en riesgo su plan «del déficit cero».

De a poco fueron siendo más concisivos en el lenguaje, guiados por sus propias necesidades de subsistencia.

Los que hablaron más de la cuenta bajaron sus notas en el cuaderno Rivadavia de cabecera de la mesa de luz presidencial.

En este marco, y por estos días, están «en las pinceladas finales» de un acuerdo que resulta inevitable porque, además, para el común de la población, la política es la que complica el logro de las soluciones. Un tema sensible en términos de opinión publica en que el Presidente, al menos hasta ahora, lleva las de ganar en la medida en que la gente sigue considerando que la responsabilidad recae sobre lo que considera como casta en el decir de Milei.

UNA CARRERA CONTRA EL RELOJ

El gran interrogante que domina la escena es si el aval del Congreso llegará, en tiempo hábil, como para ver más nítidamente reflejados los resultados, particularmente la baja de la inflación a menos de un dígito.

La preocupación que hasta ahora no reflejan los sondeos es el nivel de resistencia de los sectores más vulnerables que son, paradójicamente, quienes más siguen apoyando el rumbo, convencidos quizás de que es el camino a seguir.

En esta preocupación coincide el Papa y el FMI, que temen por la posibilidad de que el ajuste tenga consecuencias indeseadas.

El Presidente -por ahora- cree que no hay

que poner en riesgo las metas y prefiere echar la culpa a la política por la falta de sensibilidad social al ejercer «un virtual bloqueo o corsé» sobre las decisiones legislativas que, hasta ahora, no se plasman.

El 25 de mayo en Córdoba se espera que todos los gobernadores rubriquen el llamado Pacto de Mayo. Antes de eso, que le otorguen al Gobierno las herramientas pedidas, a partir de las cuales el Presidente podría dar mejores respuestas sin poner en riesgo el objetivo del déficit cero que no está dispuesto a resignar.

A esta altura, los mandatarios provinciales tienen ya en claro que no tienen más margen para tensar la cuerda. Hombre de reacciones rápidas a Milei no le cuesta decisiones fuertes que podrían volver todo a fojas cero, con mayores costos, algo que ningún gobernador quiere.

EL «CUCO» DE LA CORTE

Los gobernadores, al menos la mayoría de ellos, han tomado nota que la recurrente advertencia de ir a la Corte no le mueve el amperímetro a un gobierno que sabe que los tiempos de la Justicia no se compadecen con los de la economía ni la política, ni el de los propios medios. Ya lo dice el refrán: «Mejor un mal arreglo que un buen pleito». Este dicho adquiere mayor actualidad si se observa lo difícil que es obtener un fallo a favor del alto Tribunal y el carácter meramente declarativo de este con una Corte como esta, que no se preocupa en hacer cumplir sus propios fallos.

Así las cosas, han comenzado «a recalculan», teniendo en cuenta que las necesidades apremian.